

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	RECURSO DE INSISTENCIA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-01152-00
DEMANDANTE:	RODOLFO ANTONIO ARAGON BERMUDEZ Correo: rodoantonio22@hotmail.com
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI
ASUNTO	DECLARA BIEN DENEGADO DERECHO DE PETICIÓN

Providencia discutida y aprobada en Sala y Acta de la fecha.

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a resolver en única instancia el recurso de insistencia presentado por el abogado RODOLFO ANTONIO ARAGÓN BERMUDEZ quién actúa en representación del señor VÍCTOR JULIO QUINTERO BUSTAMANTE, remitido a esta Corporación por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali.

II. ANTECEDENTES

2.1. La Petición

El abogado RODOLFO ANTONIO ARAGÓN BERMUDEZ actuando como defensor de confianza del señor VÍCTOR JULIO QUINTERO BUSTAMANTE dentro del proceso penal radicado bajo el SPOA No. 761096000000201900017, en ejercicio del derecho de petición, presentó el día 03 de junio de 2020 ante el CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI, una solicitud en el sentido de obtener copia de los audios de la **audiencia reservada** llevada a cabo el 16 de abril de 2019, donde se expidió la orden de captura en contra del ciudadano Víctor Julio Quintero Bustamante, por parte del Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.

Como sustento de la petición concretamente señalo que: “(...) ya se levantó la reserva al hacerse efectiva su captura el 22 de mayo de 2020 en la ciudad de Buenaventura.”.



2.2. Decisión del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali

El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, mediante oficio No. JPCA-PAAPI Oficio No. 61116 del 19 de junio de 2020, negó la solicitud indicando lo siguiente: *“si bien es cierto, y de conformidad con los documentos allegados con su solicitud, ya se levantó la reserva legal para el caso del señor VICTOR JULIO QUINTERO BUSTAMANTE, también lo es, que se desconoce en la actualidad si en la misma audiencia reservada que vincula al prenombrado se tomaron disposiciones diversas que **involucran a otras personas**, por las cuales la reserva deba permanecer incólume, siendo del resorte exclusivo del juez que tenga el caso en su conocimiento, la autoridad competente para habilitar tal acceso. En ese orden de ideas, no es posible dar viabilidad a su solicitud, por expresa prohibición legal.”*.

2.3. El Recurso de Insistencia

El peticionario a través de mensaje enviado por correo electrónico del 07 de julio de 2020, inconforme con la respuesta recibida, se pronuncia respecto a lo solicitado en el derecho de petición de la siguiente manera: *“(…) manifiesto a usted que insisto en la copia del audio de la audiencia reservada de orden de captura, celebrada el 16 de abril de 2019 ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali (Valle), toda vez que conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre los deberes y atribuciones especiales de la defensa que en su numeral 9 refiere que en la actividad probatoria a que tiene derecho la defensa ninguna entidad pública o privada podrá oponer reserva, siempre que se acredite que la información será utilizada para efectos judiciales, en el presente caso mediante oficio No. 61116 del 19 de junio de 2019, se dice que se encuentra levantada la reserva pero que respecto a otras personas no se sabe, valga aclarar que esa situación escapa a la defensa y que la petición ha sido concreta respecto al señor QUINTERO BUSTAMANTE, por otra parte, no es del resorte de la defensa dentro de sus actividades investigativas pedir permiso a partes o intervinientes, ya que nos encontramos en un sistema de partes”*.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Procedencia del Recurso de Insistencia y Competencia de esta Corporación

El artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establece que toda decisión que rechace peticiones de información por motivo de reserva legal debe ser sustentada, indicando con



precisión las disposiciones que impiden la entrega de la información o los documentos. Dicha disposición es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE RESERVA. *Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.*

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.”

Aunque la norma es precisa en señalar que no procede recurso contra la decisión que rechaza la petición de información por motivos de reserva legal, la persona interesada de conformidad con el artículo 26 ibídem, podrá insistir en la petición ante la autoridad que invoca la reserva, para lo cual deberá surtirse el siguiente trámite:

“ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. *Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al **Tribunal Administrativo** con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.*

A su vez, el numeral 7 del artículo 151 ibídem le atribuye competencia a los tribunales administrativos en única instancia, para conocer de los “*recursos de insistencia*” cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental. Así se establece:

“ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. *Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:*

(...)

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá.

(...)”

De conformidad con las anteriores disposiciones, esta Corporación es competente para conocer en única instancia del presente “*recurso de insistencia*”, teniendo en cuenta que se dirige contra la respuesta emitida por el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, autoridad que pertenece a la Rama Judicial, que es una entidad del orden nacional y la decisión que rechazó la petición de información invocó un motivo de reserva legal.



3.2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si la información solicitada por el peticionario y que fuera negada por el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, está sujeta a reserva de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley.

Para el efecto, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: **i)** de los documentos sujetos a reserva en la Ley 1437 de 2011, **ii)** de la reserva legal en el proceso penal y **iii)** el caso concreto.

1.1. De los Documentos Sujetos a Reserva en la Ley 1437 de 2011

El artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, establece que tendrán el carácter de reservado la información y documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, historia laboral y demás registros personales que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas. En su tenor literal la disposición referida establece:

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:

1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
3. Los amparados por el secreto profesional.
4. Los que involucren **derechos a la privacidad e intimidad** de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.
5. Los relativos a las **condiciones financieras** de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.”

Para la Sala es claro que, la normatividad anterior precisa que la reserva de las informaciones y documentos públicos también se encuentra consagrada en la Constitución Nacional y en la ley. En efecto, de la forma como lo dispone el artículo 74¹ superior, confiriéndole la facultad al legislador para determinar en el ordenamiento jurídico las restricciones al derecho de la información, lo que constituye la institucionalización de la reserva de ciertos documentos e informaciones.

¹ “Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.”



1.2. De la Reserva Legal en el Proceso Penal

El inciso 2 del artículo 155 del Código de Procedimiento Penal establece que: *“Serán de carácter reservado **las audiencias de control de legalidad** sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente, aquella en la que decreta una medida cautelar.”.*

La Corte Constitucional² ha dicho que el principio de publicidad en el proceso penal no es absoluto, ya que puede existir reserva de algunas actuaciones judiciales, en el siguiente sentido:

*“No obstante, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales no es absoluto y por tanto, es posible que **el legislador establezca reservas en algunas etapas procesales en las que limite la intervención** de la comunidad o **de algunos sujetos procesales** con el fin de salvaguardar valores, principios superiores y derechos que también gozan de protección constitucional.*

Estas limitaciones están permitidas no solo por el artículo 228 de la Carta, que autoriza al legislador a establecer excepciones a la publicidad de las actuaciones judiciales, sino también por los artículos 8º del Pacto de San José que limita la publicidad para “preservar los intereses de la justicia” y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que “La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

*Ahora, respecto de la legitimidad de la reserva en etapas del proceso penal, esta Corporación en la **sentencia C-1711 de 2000**³ señaló lo siguiente:*

“el constituyente consagró, en los artículos 74 y 228 de la Constitución Política, el principio de publicidad, según el cual las actuaciones de las autoridades estatales, y específicamente de la

² Sentencia C-559 del 20 de noviembre de 2019, demanda de inconstitucionalidad, MP CRISTINA PARDO SCHLESINGER.

³Corte Constitucional. Sentencia C-1711 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz).



*Administración de Justicia, deben ser públicas, salvo las excepciones que señale la ley. En otras palabras, por regla general, cualquier ciudadano puede acceder a la información que consta en los documentos oficiales, y solamente el Legislador puede restringir ese derecho, imponiendo sobre ellos la reserva legal. En materia de procedimiento penal, ya ha establecido esta Corporación, en la sentencia C-038/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), **que dicho principio no es absoluto, sino que, en cada etapa del proceso, se debe armonizar con otros principios y valores, como el de la eficacia de la justicia o el de la presunción de inocencia**: "en materia penal, la imposición de una publicidad total -desde las averiguaciones previas -, podría malograr la capacidad de indagación del Estado y menoscabaría la presunción de inocencia de las personas". En ese orden de ideas, se ha determinado que el principio de publicidad se respeta cuando se mantiene como norma general, y siempre que las excepciones, señaladas por la ley, sean razonables, proporcionales, y se ajusten a un fin constitucionalmente admisible; tanto así que, como afirmó la Corte en la sentencia C-150/93 (M.P. Fabio Morón Díaz), "la reserva de determinadas actuaciones judiciales del proceso penal, redundaría en algunos casos en el cabal ejercicio de tales funciones".*

*En ese escenario, aunque las audiencias del proceso penal son públicas y de ellas quedan registros magnetofónicos, el Código de Procedimiento Penal **permite que se limite el acceso de personas a algunas actuaciones**, cuando se puedan afectar otros valores constitucionales de mayor relevancia para el proceso.*

*Así, los artículos 150 y siguientes del Código de Procedimiento Penal **restringen la publicidad del proceso** por motivos de orden público, seguridad nacional, respeto a las víctimas, imparcialidad o moralidad, en los siguientes términos:*

“Artículo 150. Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública. Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.

Artículo 151. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público o a la prensa.



Artículo 152. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa”
(...)

ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria.

Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente, aquella en la que decreta una medida cautelar.”

Cabe resaltar que en este último caso, **la reserva no sólo está consagrada respecto de la sociedad, sino también en relación con la persona investigada,** para garantizar la efectividad de la investigación penal, ya que en estas audiencias del artículo 155 del C.P.P., solo asiste el fiscal⁴. **En estos casos, la limitación del principio de publicidad está plenamente justificada por el legislador.**

Ahora, sobre la figura de **la reserva en las actuaciones judiciales en materia penal**, este Tribunal en la sentencia T-920 de 2008⁵ expresó que la misma es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva, por tanto “la autoridad pública sólo tendrá la posibilidad de negar el acceso a los documentos o diligencias cuando quiera que las mismas reúnan dichas condiciones y, esencialmente, justifiquen la reserva de la información” Sobre el particular se afirmó lo siguiente:

“Dentro de las actuaciones judiciales la regla general es la aplicación del principio de publicidad y que, por tanto, la aplicación de la reserva tiene carácter restrictivo, pues debe estar definida claramente en la ley, bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad (...) Así pues, la restricción del acceso del público en general a un proceso judicial o a alguno de los componentes del expediente debe estar explícitamente definida en

⁴ Ver sentencia T-409 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).

⁵ Corte Constitucional. Sentencia T-920 de 2008 (MP: Clara Inés Vargas). En esta sentencia la Corte conoció de un caso con los siguientes supuestos de hecho: (i) fue practicada una diligencia de allanamiento en la residencia de un accionante sin dársele a conocer las razones que motivaban dicha actuación; (ii) el actor pretendió ejercer su derecho de defensa cuestionando las actuaciones del órgano acusador, (iii) sin embargo, la Fiscalía negó el acceso del afectado a la audiencia del artículo 237, manifestando que por tratarse de una indagación preliminar dicho trámite se encontraba sujeto a reserva judicial.



la ley. Tal regla, por supuesto, es muchísimo más exigente en lo que se refiere a las partes o intervinientes dentro del proceso, pues respecto de éstos el acceso a las piezas procesales constituye uno de los elementos básicos para hacer valer los derechos de contradicción y de defensa”.

Respecto de la reserva frente a las partes, este Tribunal afirmó lo siguiente:

“La Sala debe señalar que para cumplir con el requisito formal de la reserva de la carpeta y justificar la restricción del derecho de acceso a la información procesal, la Fiscalía debía explicar cuáles son las condiciones legales específicas o la etapa procesal en la cual se efectúa el descubrimiento de la evidencia física o de los elementos materiales probatorios de los cuales requería copia o, mejor, cuáles son las normas que limitan el principio de publicidad de los actos procesales, específicamente, aquellos que se efectúan durante la indagación, y finalmente, teniendo en cuenta los argumentos de la segunda petición presentada por el actor, especificar por qué la orden de archivo de las diligencias mantiene la reserva de las evidencias y las actuaciones de la Fiscalía.

(...)

Es necesario que la Fiscalía distinga explícitamente, a partir de la Ley 906, cuáles elementos se encuentran cobijados por la reserva y cuáles no. De hecho, frente al caso concreto es necesario destacar que en la sentencia C-1154 de 2005 la Corte reconoció que debido a las implicaciones inherentes a las órdenes de archivo, dicha decisión no tiene carácter reservado sino que, por el contrario, debe ser comunicada a las partes, especialmente a las víctimas y al Ministerio Público cuando quiera que no exista indiciado conocido. También así, recordemos, conforme al artículo 267 debe concluirse que al indiciado se le debe comunicar el inicio de la indagación y, especialmente, éste tiene derecho a saber las condiciones bajo las cuales se efectúa un allanamiento y los argumentos que el juez de control de garantías aplicó para efectuar la revisión de legalidad de la actuación (art. 238 C.P.P.).”(Subraya fuera de texto).

Bajo ese contexto, la Corte ha considerado que **estas audiencias y diligencias de carácter reservado** tienen su origen en la “inherente prudencia” aplicable a las actuaciones penales y desarrollada en virtud de una interpretación sistemática de los artículos 2, 15, 28 y 74 constitucionales, **“por cuanto el libre acceso de su contenido podría atentar contra el interés general y desarticular la lógica que inspira al proceso penal”**.⁶ (Negritas y subrayas fuera de texto).

1.3. El Caso Concreto

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).



Descendiendo al caso concreto, debe precisar la Sala que con el recurso de insistencia el abogado Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez pretende que se le suministre las copias de los audios que contienen la audiencia realizada el 16 de abril de 2019, en la que el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, expidió la orden de captura contra el señor Víctor Julio Quintero Bustamante, argumentando para el efecto que, ya se hizo efectiva la captura a su prohijado el 22 de mayo de 2020 en la ciudad de Buenaventura y, legalizada mediante audiencia celebrada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad.

El juez coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, se abstuvo de suministrar la información solicitada, para lo cual invocó la reserva legal contenida en el inciso 2 del artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, disposición que efectivamente establece la reserva de las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas.

Señaló que, dentro de las múltiples funciones administrativas que cumple el Centro de Servicios Judiciales, se encuentra la de guarda, custodia y vigilancia de las audiencias de carácter reservado que se efectúan ante los Jueces Penales Municipales con Función de Control de Garantías adscritos a esa Instancia Judicial en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Indicó que, si bien es cierto que con los documentos allegados junto a la solicitud de copias se demostró que al haberse realizado la captura del señor Víctor Julio Quintero Bustamante se levantó la reserva legal, también lo es, que **se desconoce en la actualidad si en la misma audiencia reservada que vinculó al imputado se tomaron disposiciones diversas que involucran a otras personas, por las cuales la reserva deba permanecer vigente.** Por tal motivo, dijo que es competencia exclusiva del juez de conocimiento, conceder o no el acceso a lo solicitado.

Con base en lo anterior, considera la Sala de Decisión que no le asiste razón al peticionario al predicar que tiene derecho a la expedición de las copias de la audiencia en la que se libró la orden de captura contra su defendido, en razón a que ya se hizo efectiva la captura, toda vez que, como bien lo expuso el juez coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, a la fecha de la solicitud **se desconoce si dentro de la referida audiencia celebrada dentro del proceso penal radicado bajo el SPOA No. 76109600000201900017, se han proferido decisiones distintas que pudieran involucrar a otros sujetos** a dicho proceso, decisiones que por las características propias de la audiencia siguen teniendo el carácter de reservadas.



De otra parte, pertinente resulta señalar que, si bien el abogado Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez actuó como defensor de confianza del señor Víctor Julio Quintero Bustamante dentro del proceso penal, para el presente asunto no acreditó estar facultado mediante poder especial para elevar el derecho de petición a nombre de esa persona, lo que constituye una evidente falta de legitimación en la causa por ausencia de poder, pues el interés legítimo para el efecto sólo lo tiene la parte actora.

Así las cosas, el juez coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali no debió resolver la referida solicitud, en razón a que el profesional del derecho solamente se encuentra facultado para actuar en calidad de representante dentro del proceso penal y no acreditó estar facultado para invocar a nombre de otra persona, un derecho fundamental y constitucional como lo es el de petición.

Por todo lo expuesto, la Sala declarará bien denegada la petición formulada por el abogado Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez como defensor de confianza del señor Víctor Julio Quintero Bustamante, mediante derecho de petición presentado a través del correo electrónico institucional el día 03 de junio de 2020 ante el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali.

En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR bien denegada la petición realizada por el abogado Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez como defensor de confianza del señor Víctor Julio Quintero Bustamante mediante escrito del 03 de junio de 2020 ante el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Una vez en firme, archívese las presentes diligencias previas las anotaciones de rigor⁷.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

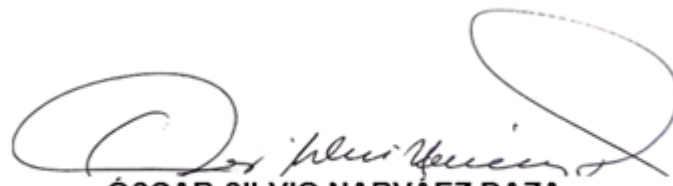
⁷ VoBo Secretario
Proyectó Andrés M.

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2020-01152-00
: RECURSO DE INSISTENCIA
: RODOLFO ANTONIO ARAGÓN BERMÚDEZ
: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CENTRO SERVICIOS JUZGADOS PENALES DE CALI



11



ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



OMAR EDGAR BORJA SOTO

Ausente con permiso
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS